

Santiago, siete de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Francisco Andrés Fuster Vásquez, abogado, en representación de Cristian Eduardo Careau Carimán, chileno, solicita que se conceda el exequátur a fin de que se cumpla en Chile la sentencia dictada con fecha 23 de febrero de 2007 por el Juzgado Civil N° 5 de la Provincia de Neuquén, Argentina, que declaró a María del Carmen Regidor como heredera universal de todos los bienes quedados al fallecimiento de Dolores Bozada Paredes. En su presentación, señala que tiene legítimo interés en solicitar el cumplimiento en nuestro país de la resolución argentina, en atención a que tiene la calidad de cesionario de los derechos hereditarios que María del Carmen Regidor adquirió de su madre respecto de la herencia quedada en Chile a su fallecimiento, lo que incluye derechos en un inmueble ubicado en la comuna de Curarrehue, Región de la Araucanía.

A su solicitud acompañó copia apostillada de la sentencia que se pretende cumplir; copia de la inscripción de dominio del inmueble que singulariza en su presentación a nombre de la causante; y, copia de la escritura pública de cesión de derechos hereditarios celebrada entre el requirente y María del Carmen Regidor.

El Fiscal Judicial Subrogante de esta Corte informó favorablemente la referida solicitud.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, antes de entrar al fondo de la cuestión sub lite, es dable precisar que el exequátur consiste en la decisión de la Corte Suprema que, luego de sustanciar el procedimiento contradictorio respectivo, procede a revisar las exigencias legales y, sin entrar a estudiar en detalle el fondo de la cuestión controvertida y materia del fallo que se pide cumplir, otorga autorización o pronunciamiento favorable a la sentencia extranjera que lo resuelve, con el objeto de otorgarle la fuerza ejecutiva de la que carece y reconocerle los mismos efectos que los fallos expedidos por jueces nacionales, lo que permitirá se la pueda cumplir mediante el procedimiento y ante el tribunal competente.

SEGUNDO: Que enseguida conviene consignar que las Repúblicas de Chile y de Argentina se encuentran vinculadas pues ambas naciones están adheridas al “Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Bolivia y la República de Chile” suscrito el 5 de julio de 2002, el cual regula, entre otras materias, el reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales pronunciados en las jurisdicciones de los Estados contratantes.

El artículo 19 del mencionado Acuerdo de Cooperación establece textualmente que: “El reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales



solicitado por las autoridades jurisdiccionales podrá tramitarse por la vía de exhortos y transmitirse por intermedio de la Autoridad Central o por conducto diplomático o consular, conforme al derecho interno.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, la parte interesada podrá tramitar directamente el reconocimiento o ejecución de la sentencia. En tal caso, la sentencia deberá estar debidamente legalizada de acuerdo con la legislación del Estado en que se pretende su eficacia, salvo que entre el Estado de origen del fallo y el Estado en que es invocado, se hubiere suprimido el requisito de la legalización o sustituido por otra formalidad”.

Por su parte el artículo 20 del mencionado Acuerdo de Cooperación entre Argentina y Chile, establece los requisitos, indicándose que las sentencias y los laudos arbitrales, a los que se refiere el artículo precedente tendrán la eficacia extraterritorial en los Estados Parte, si reúnen las condiciones que allí se detallan:

- Que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para que sean considerados auténticos en el Estado de donde procede.
- Que estos y los documentos anexos que fueren necesarios, estén debidamente traducidos al idioma oficial del Estado en el que se solicita su reconocimiento y ejecución.
- Que éstos emanen de un órgano jurisdiccional o arbitral competente, según las normas del Estado requerido sobre jurisdicción internacional.
- Que la parte contra la que se pretende ejecutar la decisión haya sido debidamente citada y que se haya garantizado el ejercicio de su derecho a defensa.
- Que la decisión tenga fuerza de cosa juzgada y/o ejecutoria en el Estado en el que fue dictada.
- Que no contraríen manifiestamente los principios de orden público del Estado en el que se solicitare el reconocimiento y/o la ejecución.

TERCERO: Que el examen de esas exigencias permite concluir que se trata de constatar si en el procedimiento que condujo a la dictación del fallo se cumplió con unos presupuestos elementales de administración de justicia y si su contenido contraviene la legalidad fundamental de nuestro ordenamiento, sin revisar el contenido substancial de la controversia ni la justicia o injusticia intrínseca contenida en la resolución, es decir, sin erigirse el tribunal requerido en una instancia de revisión de lo allí resuelto.

Con esta premisa básica, corresponde verificar si la sentencia materia del presente exequátur cumple con los requisitos previstos, a fin de poder conferir la pretendida autorización para ser cumplida en Chile.

CUARTO: Que conforme a los antecedentes descritos en lo expositivo, es posible constatar en relación a la legitimación del requirente para solicitar el



cumplimiento de la sentencia extranjera, que se sustenta en la calidad de cesionario de los derechos hereditarios que a su favor efectuó la hija de la causante, única heredera conforme el tenor de la misma resolución. Esta circunstancia emana de la documental acompañada por éste, en la que se acredita, por un lado, que la causante posee derechos inscritos en un inmueble situado en territorio nacional y, por otro lado, que su única heredera celebró con el peticionario un contrato de cesión de sus derechos hereditarios, que incluiría los derechos de la causante en el predio que se indicó.

QUINTO: Que el artículo 16 del Código Civil, en su inciso primero, establece que "Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile", disposición que debe concordarse con lo que previene el artículo 27 de la Ley 16.271 sobre Impuestos a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, en cuanto señala: "Cuando la sucesión se abra en el extranjero -cuyo es el caso de autos- deberá pedirse en Chile, no obstante lo dispuesto en el artículo 955 del Código Civil, la posesión efectiva de la herencia respecto de los bienes situados dentro del territorio chileno, para los efectos del pago de los impuestos establecidos por esta ley. La posesión efectiva, en este caso, deberá pedirse en el lugar en que tuvo el causante su último domicilio en Chile, o en el domicilio del que pida la posesión efectiva, si aquél no lo hubiera tenido".

Por su parte, el artículo 149 del Código Orgánico de Tribunales repite esta exigencia al señalar: "Cuando una sucesión se abra en el extranjero y comprenda bienes situados dentro del territorio chileno, la posesión efectiva de la herencia deberá pedirse en el lugar en que tuvo el causante su último domicilio en Chile, o en el domicilio del que la pida si aquél no lo hubiera tenido". Finalmente, el artículo 955 del Código Civil refiere que la sucesión se rige por la ley del último domicilio del causante.

Por último, el artículo 878 del Código de Procedimiento Civil dispone que la posesión efectiva "se dará igualmente al heredero abintestato que acredite el estado civil que le da derecho a la herencia, siempre que no conste la existencia de heredero testamentario, ni se presenten otros abintestatos de mejor derecho".

SEXTO: Que la resolución judicial que se examina atendió al último domicilio de la causante, esto es, Neuquén, Argentina, para determinar tanto el tribunal competente para conocer de la sucesión como la ley aplicable, declarando la calidad de heredera universal a la hija de la causante.

En consecuencia, a juicio de esta Corte, se trata de una resolución que emana de un órgano jurisdiccional competente de conformidad con la ley chilena, es auténtica, pues se encuentra debidamente apostillada y no se opone a la ley ni al orden público nacional, desde que reconoce la calidad de heredera universal a la



hija de la causante, María del Carmen Regidor, lo que concuerda con el régimen sucesorio contemplado en el ordenamiento jurídico nacional.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, la normativa referida precedentemente, deja entregado exclusivamente a la jurisdicción de los tribunales chilenos el decidir sobre el otorgamiento de la posesión efectiva de una sucesión que comprenda bienes situados en Chile, de modo que es necesario que, en su oportunidad, se solicite ante el tribunal chileno que corresponda la posesión efectiva de la herencia quedada al fallecimiento de doña Dolores Bozada Paredes.

OCTAVO: Que, en consecuencia, la resolución del Juzgado Civil N° 5 de la Provincia de Neuquén, Argentina, que declaró a María del Carmen Regidor como heredera universal de todos los bienes quedados al fallecimiento de Dolores Bozada Paredes, que se pretende cumplir en estos antecedentes, no se opone a la jurisdicción chilena y, por tanto, corresponde acceder a la solicitud de exequátur.

Y de conformidad, con lo antes expuesto y disposiciones citadas, **se acoge el exequátur** solicitado por el abogado Francisco Andrés Fuster Vásquez, y se autoriza que se cumpla en Chile la sentencia dictada el 23 de febrero de 2007, por el Juzgado Civil N° 5 de la Provincia de Neuquén, Argentina, que declaró a María del Carmen Regidor como heredera universal de todos los bienes quedados al fallecimiento de Dolores Bozada Paredes.

El cumplimiento de la sentencia deberá solicitarse ante el tribunal que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 27 de la Ley 16.271 y 149 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese y archívese.

Rol N° 47.856-2024.-





Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) María Angélica Cecilia Repetto G., Mario Carroza E., María Soledad Melo L. y los Abogados (as) Integrantes Raul Fuentes M., Álvaro Rodrigo Vidal O. Santiago, siete de noviembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a siete de noviembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

